

República de Colombia



Rama Judicial
Distrito Judicial del Caquetá
Juzgado Primero Penal Municipal
Florencia

ACCIÓN DE TUTELA

REFERENCIA: 1800140040012021-00035

ACCIONANTE: GLADYS MARIA VEGA

ACCIONADO: ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA

SENTENCIA DE TUTELA No.35

Florencia Caquetá, Trece (13) de Abril de dos mil veintiuno (2021).

OBJETO A DECIDIR

Procede este Despacho a decidir la acción de tutela interpuesta por la señora GLADYS MARIA VEGA, contra la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA, por la presunta violación al derecho fundamental de petición.

I. HECHOS

En apoyo de sus pretensiones, se exponen en síntesis los hechos que motivaron la interposición de la acción y se encuentran consignados en el escrito de tutela, así:

Indica la accionante que fue víctima por parte del estado, quien sin mediar consecuencias fumigo con glifosato su predio en el cual existía solamente siembras legales, dicha situación fue manifestada a la Alcaldía de Belén en su momento, como consecuencia de ello se envió un derecho de petición a la Alcaldía el día 30 DE ENERO DEL 2021, del cual a la fecha no ha recibido respuesta alguna, en dicha petición solicito una reparación por los daños causados y solicita al Alcalde de Belén buscar dentro de los archivos copia de la denuncia que en su momento instauró y que de esta forma se adelante todas las acciones necesarias para ser reparada por dicho daño

II. PRETENSIONES

*Solicita que se tutele el derecho fundamental de petición y demás derechos vulnerados, así mismo se ordene a MAGNO TOMAS ROSERO BARRERA – ALCALDE DE BELÉN que en plazo máximo de 48 horas se ordene la búsqueda de la denuncia instaurada en su momento y me haga entrega de esta para poder iniciar el proceso de reparación
Y requiere que se ordene el amparo de aquellos derechos fundamentales no invocados como amenazados, violados y/o vulnerados y que Usted, en su función de guardián de la Constitución, pueda establecer como violados, amenazados y/o vulnerados.*

ELEMENTOS DE JUICIO:

- Copia de mi cedula
- Copia del derecho de petición enviado

III. TRAMITE PROCESAL

La acción de tutela fue sometida a reparto y le correspondió a este despacho quien por Auto Interlocutorio No.67 del 25 de Marzo de 2021 la admitió requiriendo a LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA y vínculo a la Procuraduría General de la Nación para que expusieran las razones que estimara necesarias con relación a los hechos y pretensiones planteados, concediéndole el término de dos (2) días.

IV.RESPUUESTAS DE LAS ENTIDADES

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA

La entidad accionada indica que frente a la manifestación de que fue víctima del Estado por una fumigación con glifosato: NO LE CONSTA. En atención a que es un hecho que no está probado ante la administración municipal de Belén de los Andaquíes y que, en todo caso, esta entidad carece de competencia para analizar y declarar derechos en su favor por esta supuesta acción lesiva.

Frente a la manifestación de que informó, en su momento, a la administración municipal de Belén de los Andaquíes: NO LE CONSTA. En razón a que no existe evidencia de que la accionante, señora Gladys María Vega, hubiera puesto en conocimiento el hecho lesivo a esta administración municipal. Frente a la manifestación de que solicitó información a la entidad el 30 de enero de 2021: ES PARCIALMENTE CIERTO. Es cierto que presentó la petición solicitando copia de una supuesta denuncia. No obstante, no es cierto que haya solicitado la reparación del daño que dice sufrir. En todo caso, debe señalarse que el día 26 de marzo de 2021, se dio respuesta a la petición instaurada por la accionante, señora Gladys María Vega, allegándole la respuesta al correo electrónico asopvicpo@gmail.com.

En consecuencia, indica que existe carencia actual de objeto por hecho superado, en razón a que el día 26 de marzo de 2021, se dio respuesta a la petición del 30 de enero de 2021, instaurada por la señora Gladys María Vega, remitiéndola al correo electrónico asopvicpo@gmail.com.

ANEXA:

Soportes que lo acreditan como Alcalde del municipio de Belén de los Andaquíes.

- *Copia de la respuesta a la petición del 30 de enero de 2021, instaurada por la señora Gladys María Vega.*
- *Impresión del mensaje de datos de correo electrónico en el que se evidencia la respuesta a la petición instaurada por la señora Gladys María Vega el 30 de enero de 2021.*

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

La entidad vinculada indica que respecto de la copia enviada de la petición a esta Regional, se tiene que la misma contiene los mismos anexos de la presente acción, que no permiten vislumbrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que sucedieron las

fumigaciones a que se alude, ni de irregularidades concretas a investigar; puesto que si bien se indicó que se denunció y se presentaron pruebas a la Alcaldía de Belén de los Andaquíes, no se conoce copia de la misma, ni de los soportes que den cuenta de la ocurrencia de los hechos que permitan encausar una investigación.

Por lo anterior, el pasado 04 de noviembre de 2020, la Procuraduría Regional analizó la denuncia presentada respecto de los mismos hechos, en el comité de quejas realizado en la fecha y se procedió a informar a la tutelante el sentido de lo decidido. (Se adjunta oficio con la constancia de recibido y auto inhibitorio del 06 de noviembre de 2020 en el que se decidió respecto de la denuncia presentada por la accionante). En tal sentido, se respondió acción de tutela interpuesta por la accionante ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito radicada bajo el número 18001-31-04-003- 2020-00300-00 contra PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS (Se adjunta copia de escrito de tutela, auto admisorio y oficios de notificación de sentencia). Sin embargo, en esta oportunidad, la presente acción se concreta en el hecho que, la Alcaldía del Municipio de Belén de los Andaquíes posiblemente no atendió oportunamente la solicitud elevada ante ellos por la accionante el pasado 30 de enero. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación no resulta competente para atender las peticiones que contempla el escrito tutelar; no obstante, se requirió mediante correo electrónico del 02 de marzo de 2021, remitido al ente municipal con copia a la accionante en el que se le pidió atender la referida petición y enviar copia a la regional.

Sumado a lo anterior, se informa al Despacho, que consultados los archivos de información, la Procuraduría en el año 2018 adelantó acción preventiva, en hechos que al parecer guardan identidad con lo tutelado, a través de las siguientes actuaciones:

- 1. Se recepcionó proceso preventivo de manera presencial a la señora GLADYS MARIA VEGA identificada con cédula de ciudadanía numero 6620976 diligencias radicadas bajo el número E-2018-057125, con fecha de recepción el 09/02/2018: "(...) Detalle de la orientación LA CIUDADANA SOLICITA LA INTERMEDICACION DE LA PGN PARA TENER LA ATENCION Y ASESORIA DEBIDA EN LA PERSONERIA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, PARA LO CUAL SE REMITE OFICIO DIRIGIDO A DICHA ENTIDAD.(...)" Se adjunta formato de atención de caso.*
- 2. Una vez oficiada a las entidades se recibió respuesta el 27 de febrero de 2018 por parte de la Personera Municipal del Municipio de Belén de los Andaquíes, en tres (03) folios junto al oficio de fecha 26 de febrero de 2018 suscrito por el coordinador agropecuario de la Secretaria de Post conflicto y Desarrollo Económico en el que se informó que se encontraba pendiente que la señora se presentara con los documentos e información requerida. De acuerdo con lo anterior, se verifica entonces que la Procuraduría Regional Caquetá no ha incurrido en vulneración alguna a los derechos de la accionante, para de esta manera solicitar al señor Juez se sirva negar lo pretendido y/o desvincular a la Procuraduría General de la Nación de la presente Acción.*

NATURALEZA DE LA ACCIÓN

El artículo 86 de la Constitución Política de 1991 estableció la figura de la "Acción de Tutela" como un mecanismo de protección a los derechos fundamentales constitucionales cuando resultan amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas y de los particulares en los casos taxativamente señalados en la ley.

Así mismo, el Decreto reglamentario 2591 de 1991 señaló que esta vía constitucional es excepcional, preferente y sumaria y fue establecida con el fin de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la Constitución, que constituye uno de los fines esenciales del Estado de acuerdo con el artículo 2º de la Carta Magna.

COMPETENCIA

El Despacho advierte que cuenta con competencia legal para determinar en derecho frente al presente asunto (Art. 37 del Decreto 2591 y numeral 1º, inciso 3º del Decreto 1382 de 2000 y Artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 modificado por el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017).

PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER

Debe establecer este Despacho si la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA está vulnerando el derecho fundamental de petición invocado por GLADYS MARIA VEGA al no contestar la petición de fecha 30 de enero del 2021 en la cual solicita una reparación por los daños causados y solicita al Alcalde de Belén buscar dentro de los archivos copia de la denuncia que en su momento instauró y que de esta forma se adelante todas las acciones necesarias para ser reparada por el daño causado.

EXAMEN DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

➤ LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA

El inciso primero del artículo 86 de la Constitución establece que *“toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”*

En concordancia con la anterior disposición, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, sostiene que se encuentran legitimados en la causa por activa: (i) la persona directamente afectada; (ii) el representante legal; (iii) el apoderado judicial; (iv) el agente oficioso; (v) el defensor del pueblo; o (vi) los personeros municipales. Así pues, la acción de tutela permite que exista una mayor flexibilidad en su interposición, ya que contempla la posibilidad de que sea presentada por diferentes actores.

La señora GLADYS MARIA VEGA, interpone la acción constitucional a nombre propio razón por la cual, se encuentra legitimada para promover la acción de tutela (C.P. art. 86º, Decreto 2591/91 art. 1º y art. 10º).

➤ LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA

La legitimación por pasiva en sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción de tutela y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada. Según

el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública y, excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

En el caso sub examine, la acción de tutela se presentó por la presunta violación al derecho de petición por parte de LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA; en tal virtud, como la tutela se dirige contra una autoridad pública, está acreditado en este asunto la legitimación por pasiva.

DECISIÓN DE INSTANCIA

La acción de Tutela es un instrumento jurídico, confiado por la Constitución Nacional a los Jueces e instituida como mecanismo para la protección de derechos fundamentales cuando se considere que han sido vulnerados por las autoridades públicas o por los particulares, en los casos que estime la ley. El núcleo esencial del *derecho de petición* reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

Como es sabido el objeto esencial de la acción de tutela es garantizar la efectiva e inmediata protección de los derechos fundamentales, pues, ciertamente, el sentido de este amparo judicial es que el juez constitucional, una vez analizado el caso particular, pueda proferir un fallo en procura de la defensa de los derechos vulnerados al afectado, siempre y cuando exista motivo para ello.

Respecto al Derecho Fundamental de Petición, es pertinente indicar que éste se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política que textualmente reza:

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”

Sobre el carácter fundamental de este derecho, ha manifestado la Corte:

"Se trata de uno de los derechos fundamentales cuya efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas (art. 2º Constitución Política).

"Por tanto, como lo expresa el Tribunal, es un derecho cuya protección puede ser demandada, en casos de violación o amenaza por medio de la acción de tutela.”¹

¹ Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 3. Sentencia del 25 de mayo de 1992. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo.

De igual forma el mencionado derecho, también se encuentra reglado por la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que derogó el Decreto 001 de 1984 (Código Contencioso Administrativo), a partir del 02 de julio de 2012.

La citada Ley respecto del derecho de petición señaló lo siguiente:

“ARTÍCULO 13. OBJETO Y MODALIDADES DEL DERECHO DE PETICIÓN ANTE AUTORIDADES. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación.

Continúa diciendo la Ley 1755 de 2015 que sustituyo el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su artículo 14, lo siguiente:

“ARTÍCULO 14. TÉRMINOS PARA RESOLVER LAS DISTINTAS MODALIDADES DE PETICIONES. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1799 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.”

De otra parte, es importante tener en cuenta lo establecido en el Decreto 491 de 2020, decreto presidencial expedido en el marco de los hechos que dieron lugar a la Emergencia Económica, Social y Ecológica, esto es, la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, y tiene por objeto que las autoridades cumplan con la finalidad de proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales, la sujeción de las autoridades a la Constitución y demás preceptos del ordenamiento jurídico, el cumplimiento de los fines y principios estatales, el funcionamiento eficiente y democrático de la administración y la observancia de los deberes del Estado y de los particulares.

En su Artículo 5 estableció lo siguiente:

“Ampliación de términos para atender las peticiones.

Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

- (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.*
- (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.*

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales.” (negrillas fuera del texto original)

De lo anterior se desprende que el mencionado derecho exige la necesidad de obtener una respuesta y que la misma sea emitida conforme a los términos establecidos, de igual forma, la respuesta suministrada se debe poner en conocimiento del peticionario, no es menos cierto que el contenido de la misma deberá ser adecuado, es decir, que guarde correspondencia con lo solicitado, sin que lo dicho conlleve necesariamente, a obtener una

respuesta favorable; desde luego, aquel se contrae a que la petición se tramite y resuelva oportunamente.

Empero, es probable que lo solicitado deba ser objeto de una actuación especial y que para iniciarla se tengan que llenar ciertos requisitos exigidos por la ley o, lo que es lo mismo, que la decisión no pueda tomarse sino en cumplimiento de un procedimiento sujeto a determinadas reglas. En tal evento, el derecho de petición se satisfará con una respuesta de la administración en tal sentido, es decir, indicando lo que corresponda, según lo dispuesto en el párrafo del artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Del caso sub examine se observa que la acción constitucional se interpone en contra de LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA, al considerar la accionante que le ha sido conculcado su derecho fundamental de petición, puesto que a la presente fecha la entidad accionada, no le ha brindado una respuesta de fondo, completa y clara al derecho de petición de fecha 30 de enero del 2021 en la cual solicita una reparación por los daños causados y solicita al Alcalde de Belén buscar dentro de los archivos copia de la denuncia que en su momento instauró y que de esta forma se adelante todas las acciones necesarias para ser reparada por el daño causado.

Por tal motivo se trae a colación la sentencia T-146/12 de nuestro máximo Tribunal Constitucional sobre el alcance de las peticiones elevadas ante a las entidades estatales y que a la letra dice:

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. (Subrayado original)

(...)

En consecuencia, ha entendido la jurisprudencia de la Corte que, se vulnera el derecho fundamental de petición al omitir dar resolución pronta y oportuna de la cuestión.² Esto ocurre cuando se presenta una de dos circunstancias: “(i) que al accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de una

² Ver sentencias T--490 de 2005, T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y T-108 de 2006

Juzgado Primero Penal Municipal de Florencia Caquetá

e-mail: jpenmfl@cendoj.ramajudicial.gov.co

teléfono 435 8706 PALACIO DE JUSTICIA, AVENIDA 16 NO.6-47

BARRIO SIETE DE AGOSTO

solicitud por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – circunstancia (i)-; o bien que habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”³

En lo que tiene que ver con la segunda circunstancia, referente a la falta de respuesta por parte de la entidad, la jurisprudencia constitucional, ha establecido que el derecho de petición supone un resultado, que se manifiesta en la obtención de la pronta resolución de la petición.⁴

Sin embargo, se debe aclarar que, el derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque la respuesta sea negativa. Esto quiere decir que la resolución a la petición, “(...) producida y comunicada dentro de los términos que la ley señala, representa la satisfacción del derecho de petición, de tal manera que si la autoridad ha dejado transcurrir los términos contemplados en la ley sin dar respuesta al peticionario, es forzoso concluir que vulneró el derecho pues la respuesta tardía, al igual que la falta de respuesta, quebranta, en perjuicio del administrado, el mandato constitucional.”⁵

En conclusión, puede decirse que el derecho fundamental de petición propende por la interacción eficaz entre los particulares y las entidades públicas o privadas, obligando a éstas a responder de manera oportuna, suficiente, efectiva y congruente las solicitudes hechas por aquellos de faltar a alguna de estas características se traduce entonces en la vulneración del derecho de petición.

CASO CONCRETO

Descendiendo al caso en concreto se tiene que la accionante GLADYS MARIA VEGA, indica que a la fecha de presentación de la acción de tutela no se ha brindado una respuesta, completa, clara, precisa y de fondo al derecho de petición de fecha 30 de enero del 2021 dirigido a la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA en el cual solicita una reparación por los daños causados y solicita al Alcalde de Belén buscar dentro de los archivos copia de la denuncia que en su momento instauró y que de esta forma se adelante todas las acciones necesarias para ser reparada por el daño causado.

Es de advertir que la entidad accionada, en escrito que antecede informa que el día 26 de marzo de 2021, dio respuesta a la petición instaurada por la accionante, señora Gladys María Vega, allegándole la respuesta al correo electrónico asopvicpo@gmail.com. Además se anexa oficio dirigido a la accionante mediante el cual se observa que se resuelve la petición del 30 de enero de 2021 (fumigación de cultivo), la cual fue notificada igualmente al correo electrónico notificacionesjudicialescecompe@hotmail.com.

³ Sentencia T- 147 de 2006

⁴ Sentencia T-567 de 1992

⁵ Sentencia No. T-242/93

Así las cosas, se advierte que la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA ya emitió una respuesta completa, congruente y de fondo enviando oficio el 26 de marzo de 2021, el cual fue notificado a la accionante a la dirección de correo electrónico que aportó en la presente acción de tutela, lo que demuestra que efectivamente se le garantizó el derecho fundamental de petición a la señora GLADYS MARIA VEGA; así mismo se demostró por parte de dicha entidad dentro del término de la presente acción de tutela y antes del fallo, que efectivamente en el transcurso del traslado se brindó una respuesta a la petición. Lo anterior da origen a una carencia actual de objeto figura que reiteradamente la Corte Constitucional establece que se configura en eventos específicos, por un hecho superado, puesto que la situación de hecho que generó la violación o amenaza ya fue superada, por lo tanto el proceso carecería de objeto y la tutela resulta improcedente.

Por tanto, se observa que el único asunto objeto de discusión de la presente acción constitucional como se ha verificado, ya se cumplió lo pretendido con esta acción, pues se dio respuesta a través del oficio enviado *el día 26 de marzo de 2021 a la señora GLADYS MARIA VEGA el cual fue notificado* en la dirección electrónica permitida por la accionante en la presente acción de tutela, conforme la información suministrada por la entidad accionada, y que obra como prueba en la presente acción de tutela.

Así las cosas, considera el suscrito funcionario Judicial, que se encuentra frente a un hecho superado, que como su nombre lo indica, es el evento en el cual han desaparecido los supuestos de hecho que motivaron la presentación de la Acción de Tutela, tornando improcedente el amparo deprecado por carencia de objeto, así lo ha dejado sentado la Corte Constitucional en sentencia T- 146 del 02 de Marzo de 2012, con ponencia del doctor JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB: *“...ha considerado que cuando hay carencia de objeto, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental invocado”*

En la Sentencia T-988/02, la Corte manifestó que *“(...) si la situación de hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde eficacia y por lo tanto razón de ser.”*

Por lo visto, sin más consideraciones, la acción de tutela propuesta deberá negarse, dado que los hechos que dieron lugar a la misma ya desaparecieron.

Parte Dispositiva.

Son suficientes las anteriores consideraciones para que este Despacho, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVA:

PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional impetrado por GLADYS MARIA VEGA contra la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES CAQUETA, por la configuración de hecho superado, y por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes e intervinientes por el medio más expedito posible, advirtiéndoles que esta decisión podrá ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta providencia, se enviará al día siguiente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Juzgado Primero Penal Municipal de Florencia Caquetá
e-mail: jpenmfl@cendoj.ramajudicial.gov.co
teléfono 435 8706 PALACIO DE JUSTICIA, AVENIDA 16 NO.6-47
BARRIO SIETE DE AGOSTO

CUARTO: Si la tutela es excluida de Revisión, archívese de forma definitiva una vez regrese de la Corte Constitucional.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



FREDDY ESPINDOLA SOTO
JUEZ PRIMERO PENAL MUNICIPAL DE FLORENCIA